BORRADOR DE CUENTA ELABORADA SOBRE LA BASE DE INFORMES DE LA BIBLIOTECA DEL SENADO

Vocativo,
Amigos y amigas,

En 1812, bajo el Gobierno de José Miguel Carrera, se instituye el Senado, que fuera la primera corporación legisladora de Chile. Ese hito, fundacional para la historia legislativa del país, marcó un largo camino de contribución al desarrollo de la nación.

Durante la Patria Nueva y el período de organización de la República, entre 1817 y 1833, la institución se consolida en los distintos textos constitucionales dictados en la época. Desde 1833 el Senado fue un activo promotor para establecer limitaciones a las facultades del poder presidencial. Era el Legislativo el que aprobaba la posibilidad de otorgarle al Presidente facultades extraordinarias, así como también tuvo el poder de votar las denominadas “leyes periódicas”, las cuales incluían la ley de presupuesto, las de presupuesto y de mando militar.

Durante el siglo XIX, y, sobre todo, en su segunda mitad, el Senado fue tribuna de profundos y significativos debates nacionales. Con la enmienda constitucional de 1874, que limitaba las posibilidades del Presidente de la República de asignarse facultades legislativas extraordinarias, así como también la disminución del mismo en el poder de veto de ciertas disposiciones parlamentarias, el Senado adquirió condición de contrapeso al poder presidencial, cuyo propósito consistió -como siempre- en impedir el poder total de líderes autoritarios y/o populistas.

En paralelo a este propósito fundamental, de hacer contrapeso a una figura única que detentara todo el poder, el Senado fue participe activo en la promoción de las llamadas “leyes laicas” de 1883, que sentaron las bases de la secularización del Estado, incorporando componentes de igualdad para el culto, y que fuera el preámbulo de separación definitiva entre la Iglesia Católica y el Estado, establecida en la Constitución de 1925.

Andrés Bello, José Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Mackena y Abdón Cifuentes, entre otros, fueron senadores e insignes intelectuales de la época, que dejaron huella en este largo camino de progreso para Chile. Este último, Abdón Cifuentes, fue uno de los primeros senadores en ubicarse en la vanguardia de la sociedad, al pronunciar un discurso en sala en favor del sufragio femenino, que se sumó, desde el Partido Conservador, a los grupos progresistas que mayoritariamente promovían estas ideas de avanzada para la época.

No es fácil mirar el pasado con los ojos del presente, porque ese solo ejercicio tiende a descontextualizar la realidad de un momento histórico determinado. Por ello relevo la voluminosa tarea legislativa, su contribución al desarrollo democrático del país, y su renovada vigencia para los tiempos que nos toca vivir.

Desde esta misma testera fueron aprobadas leyes que han sido sustento de los avances sucesivos de nuestra sociedad. Leyes que reconocían, por ejemplo, derechos y libertades básicas, impugnados en su momento, como es el caso de la dictación de la ley de Instrucción Primaria de 1813 y la ley de Libertad de Vientres de 1817. Luego vendrían normas de tal importancia que hasta el día de hoy subsisten, como es el caso del Código Civil de 1855, así como la Ley de Accidentes del Trabajo de 1916 y la norma que constituye el antecedente del Código del Trabajo que establece el derecho a sala cunas, de 1917.

El establecimiento del sufragio femenino en 1934, para las elecciones municipales, que fuera el antecedente de su ampliación en tanto derecho universal, de 1949, fue un hito fundamental. Ya en la década de los sesenta, el Senado fue un actor indispensable para la ley de organizaciones comunitarias, la ley de la reforma agraria, así como para la nacionalización del Cobre. Reconozco, prácticamente medio siglo después, la patriótica contribución en estos avances, de los Presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, que fueran también insignes senadores de la Republica.

El Golpe de Estado de 1973, truncó una tradición democrática más que centenaria, y cobró con sangre cientos de miles de vidas inocentes. Esto, aunque es sabido, bien vale recordarlo cuando la crítica maximalista sólo pretende hacer juicio de los gobiernos democráticos establecidos post dictadura.

Aunque imperfecta, como es evidente conforme a la perspectiva histórica, el retorno de la democracia, significó el fin de las torturas, los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos. El inicio de la transición fue encabezado por quien fuera Senador y también Presidente de la Corporación, el Presidente Patricio Aylwin Azocar. Tiempos complejos para quien acompañó, con aplomo, carácter y sentido republicano esta inmensa tarea, desde esta misma testera, cómo es el caso del Senador Gabriel Valdés Subercaseaux.

Mientras se recomponía el tejido social, y se re instauraban las instituciones democráticas, Chile tenía el imperativo de combatir la pobreza que se alzaba por sobre el 40%, infausta herencia que había dejado el otrora dictador que ostentaba el título de Comandante en Jefe del Ejército.

Soy autocrítico de lo que hemos hecho en el pasado reciente, pero me parece que el balance debe ser contextualizado. La modernización del país y el crecimiento económico acelerado de la década de los noventa, generó bienestar material en vastos sectores de la población: se redujo la pobreza, se quintuplicó la matrícula en la educación superior en 1995, y se democratizaron ciertos bienes y servicios que en los inicios de la transición eran literalmente prohibitivos. Aunque se combatió la pobreza, la desigualdad se mantuvo, prácticamente, inalterada.

Aún así, el Senado fue protagonista de avances en extremo importantes, que fueron en la dirección correcta. Relevo la modernización de la infraestructura en el Gobierno del Presidente Frei, el Plan Auge, el Seguro de Desempleo, y la eliminación de los senadores designados y los amarres autoritarios de la Constitución del 80, en el Gobierno del Presidente Lagos, la reforma previsional en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet y la reforma educacional, laboral y tributaria en su segundo mandato, y el post natal de 6 meses, establecido en el primer mandato del Presidente Piñera.

Mientras se establecían estos avances, y se daban estos debates, se producía en las profundidades de la sociedad un tipo de malestar social invisible, silente y escurridizo, sobre todo para el mundo político, pero que sectores intelectuales ya avizoraban antes de la revolución pingüina del 2006, las movilizaciones estudiantiles del 2011 y, por cierto, del Estallido Social del 2019. El informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 1998, advirtió sobre este fenómeno, de forma anticipada. Y, aunque desoído, dio cuenta de una realidad paradójica: mientras aumentaba el bienestar material, aumentaba, a su vez, el malestar social.

Se trataba sin duda de los déficits que generaba el Estado Subsidiario, y de la desarrollada capacidad del neoliberalismo de imponerse no solo como una forma de libre mercado en su versión extrema, sino también como una forma cultural de vida cuantificada, disminuida únicamente a los vaivenes de la ley de la oferta y la demanda. Por eso el malestar social es también un tipo de malestar neoliberal, si me permiten la expresión, porque genera la paradoja de que la indignación frente a las injusticias, desigualdades y abusos, camina a la par de un manifiesto anhelo de superación individual, incluso a costa del resto.

Aún cuando la política había sido parte del problema, el Senado fue parte de la solución, en tanto en su seno se fraguó el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que dio cauce institucional al proceso constituyente en curso en el país, y significó una respuesta política ante la crisis social inédita en la historia. Valoro la participación de una parte significativa de las fuerzas políticas, de todo el arco

ideológico, y, en especial, del entonces diputado y actual Presidente de la Republica, Gabriel Boric, quien con coraje enfrentó las críticas de quienes no comprendieron el significado histórico de su conducta.

Este breve relato histórico, tiene la intención y el sentido de poner de manifiesto aquello que, en más de una ocasión, el Presidente Boric ha puesto sobre la mesa: la historia no comienza con nosotros, y cada avance, por pequeño que sea, es posible gracias a quienes nos antecedieron en la misma tarea, en la misma lucha, en la misma misión.

Lo hago también para combatir, humildemente, esa vanidosa pretensión de aquellos que se erigen en tutores morales y fundadores de la “nueva sociedad”, que dictan cátedra de cómo hay que comportarse en todos los aspectos de la vida pública y privada. Las instituciones democráticas tienen el deber de derribar todos esos mitos.

1. Manifiesto Democrático

Sr. Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font,
Autoridades del Estado,
Amigos y amigas,

La actual coyuntura impone la máxima responsabilidad hacia las instituciones democráticas, porque son ellas, precisamente, las que nos resguardan de los líderes autoritarios y/o populistas latentes en todos los países. Ese es el contrapeso que representa el Poder Legislativo. No existe un tipo de “gen” autoritario o populista que esté presente en algunas personas, y que se exprese en cualquier país, en cualquier época, por razones estrictamente naturales. Por el contrario, son las propias sociedades las que generan las condiciones para su emergencia, o las que, por el contrario, crean y establecen los mecanismos para impedir su surgimiento y desarrollo.

Por eso he dicho, y reiterado, la idea de que la democracia es un sistema que, aunque imperfecto, es una creación de la civilización occidental, y, seguramente, una fase avanzada del desarrollo humano. De ahí se sigue que, así como nace, también puede morir. Esto que es evidente, lo es de una forma específica en América Latina cuando campearon las dictaduras militares que liquidaron las democracias “de golpe”.

Sin embargo, cuando la democracia es naturalizada, post dictaduras, sobre todo en América Latina, porque se da por hecho, como algo que existe y existirá siempre por el solo contraste con dictaduras cruentas y oscuras, y por los años a través de

los cuales se ha asentado, es cuando se pierde de vista que hoy las democracias mueren de otras formas, que agonizan lentamente y que cuando ya no existen, las ciudadanas y ciudadanos no lo alcanzaron a percibir. Así lo han señalado los profesores Levitsky y Ziblatt, con profundidad conceptual y evidencia científica. Por ello la democracia es un desafío permanente, y un proyecto continuo.

Sabemos que, la democracia es, además, un sistema, porque combina instituciones y procedimientos para resolver los conflictos dentro de las sociedades. Es cierto que existe una crisis de representación en nuestro país, lo que se atestigua regularmente en la opinión pública respecto de la confianza en estas propias instituciones democráticas. Esto se explica por muchas razones, incluida aquella que asigna exclusiva responsabilidad a la clase política. Es cierto, aunque parcialmente.

El propio sistema de representación por distritos, por ejemplo, genera una distorsión en la percepción ciudadana. Aquí hay presentes parlamentarios de todo el país, de todos los distritos, y todos y todas son representantes populares que, en general gozan del cariño mayoritario en su territorio, pero son objeto de los odios más enconados fuera del mismo. Esto se produce en parte por la despolitización de la sociedad, ya que existe una adhesión que no necesariamente, y ni siquiera en absoluto, se da en el ámbito de las ideas, sino en el de la acción clientelar. El “político propio” es amado, mas el “político ajeno” es odiado. Esto genera el efecto que, en suma, todos los políticos sean odiados.

Este hecho hace parte del fenómeno neoliberal de considerar la acción política como una suma de acciones individuales y aisladas de los actores. De ahí que, el ser “independiente” haya tomado valor en contraste de aquel que hace parte de un colectivo político, precisamente por el individualismo que ha impuesto el sistema económico.

Por ello es que, el sistema democrático se fortalece a través de las instituciones. Las instituciones son un resguardo frente a la acción individual que solo rinde cuentas hacia si misma, y constituye una expresión de aquello que se conoce desde el siglo XVII como la “voluntad general”. Las instituciones son un antídoto en contra de los populismos y los autoritarismos que han pretendido, históricamente, suprimirlas, para hacer valer sus propios deseos y su propia voluntad.

La democracia es también, además de un sistema, una forma de vida colectiva. Es, diríamos, la única forma posible en sociedades complejas. Esa forma de vida se funda en el diálogo, en el respeto y en la tolerancia. Personalmente, creo ser promotor y garante de un clima de respeto en el Senado, donde todas las senadoras

y senadores tienen el derecho de expresar sus ideas con el único límite del mismo respeto hacia los demás. Esta es la conducta que hemos tenido todos y todas quienes hemos tenido el honor de presidir el Senado.

Por desgracia, ese no es el clima que impera en el país. La crispación del debate político ha llegado a límites que no son aceptables. A veces se impone la censura, a veces la descalificación, y a veces el insulto. Por ello, la democracia es, a la vez, una actitud, que acepta la opinión ajena y la recibe como legítima. La valora, y la considera necesaria, porque existe una comprensión de que una sociedad que avanza lo hace desde la diferencia, y no desde la anulación de las perspectivas del otro.

Desde el Senado, esta institución de dos siglos, que no es un club de aristócratas u oligarcas sino una cámara de representantes populares recientemente renovada, me sumo al llamado que ha hecho con autenticidad y vocación democrática el Presidente de la República, Gabriel Boric, para establecer un clima de respeto entre las ciudadanas y ciudadanos y de ese modo enfrentar los desafíos que nos impone el futuro.

1. Nueva Constitución

Amigas y amigos,

El 25 de octubre del 2020, el pueblo de Chile derogó, social y políticamente, la Constitución de Pinochet, que fue impuesta con sangre por la fuerza. Este hecho, único en la historia, estableció un camino, fijó una ruta y resolvió un dilema histórico que era parte del anhelo de cientos de miles de chilenos y chilenas por tener una Constitución nacida en democracia.

La legitimidad del origen democrático de la Nueva Constitución es de suma importancia, y es el primer elemento, y eje central de un texto que rige y organiza la sociedad. Esa legitimidad ya está establecida y ahora nos enfrentamos a otra coyuntura.

El dilema que enfrenta el país para el día del plebiscito de salida es de naturaleza distinta. Lo que está siendo sometido a consideración de la ciudadanía es el texto propuesto por la Convención Constitucional, por lo que, cualquiera sea el resultado, sigue prevaleciendo la voluntad popular expresada en las urnas el día del plebiscito de entrada que derogó, en los hechos, la Constitución de la Dictadura.

El día 4 de septiembre no concluye el proceso constituyente, como es obvio. Se abre una nueva fase, una nueva etapa que, necesariamente debe ser capaz de recoger las opiniones de las ciudadanas y ciudadanos, que aún tienen dudas, que aún no están convencidos, que aún creen que es posible tener una nueva constitución que no sea motivo de controversia entre las chilenas y chilenos.

El camino que se abre el 4 de septiembre, no es ni de maximalismos ni de inmovilismos. No es patrimonio ni de uno ni de otro sector. No pertenece ni a los partidos políticos, ni a los independientes, ni a los movimientos sociales, ni al Parlamento ni al Gobierno. Ese camino es el camino del pueblo de Chile, en su total integridad y en su completa diversidad.

El 4 de septiembre se enfrentan dos opciones igualmente legítimas. Ninguna de las dos, y tampoco en absoluto el hecho mismo de la nueva constitución resuelve los problemas que, para hoy, son centrales y urgentes para los ciudadanos. Por mucho tiempo se acusó a quienes provenimos de la izquierda promoviendo el cambio constitucional, que engañábamos al pueblo con la monserga de que la Nueva Constitución iba a resolver todos los problemas. Eso es una mentira que hizo mucho daño, porque no existe ningún dirigente de las fuerzas políticas de centro izquierda que haya promovido semejante afirmación.

La delincuencia, la inflación, la situación económica, los problemas de la educación, la salud y las pensiones, todos problemas permanentes de la sociedad que hoy constituyen las principales preocupaciones ciudadanas, no serán resueltos por la Nueva Constitución. Sin embargo, tales problemas son imposibles de resolver con una Constitución que, por la vía de los hechos, termina declarando inconstitucionales las ideas de un sector político que promueve tales o cuáles medidas y leyes para resolver dichos problemas.

Estimados amigos y amigas,

Desde esta testera miro los 200 años de historia del Senado y siento orgullo de su contribución al país. Precisamente porque somos capaces de mirar el pasado, es que podemos comprender mejor el presente para proyectar el futuro.

En sus manos tienen la memoria, los datos y los hitos relevantes del senado en 1 año de trabajo legislativo. Sin embargo, he preferido enfrentar esta cuenta pública con perspectiva histórica, porque estoy convencido, al igual que el Presidente Boric, de que estamos parados sobre "hombros de gigantes".

Soy impaciente respecto del futuro, y aunque no creo ser incauto, miro con fe y esperanza el futuro. No puedo hacerlo de otra forma. No creo que tengamos otra alternativa.

El Senado de República sigue en pie al servicio del país.

Muchas gracias.

INTERVENCIÓN SENADOR ÁLVARO ELIZALDE SESIÓN EN SALA PARA VOTAR OFICIO QUE PRORROGA LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, Y LAS PROVINCIAS DE ARAUCO Y DEL BIOBÍO, DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.

- Es muy importante actuar con responsabilidad ante la compleja situación que se está viviendo en el sur de Chile. Por esa razón, valoro la actitud que ha tenido esta corporación que, por ejemplo, votó en su mérito el proyecto de infraestructura crítica dejando de lado la lógica de pasarse cuentas políticas recíprocas entre sectores, las que finalmente terminan perjudicando a las personas.
- Eso es lo que debería ocurrir con todo el congreso nacional. Si bien nuestras legítimas diferencias forman parte de una democracia, al momento de legislar o al momento de pronunciarnos, ya sea sobre la prórroga de un estado de excepción constitucional o de una reforma constitucional, hay que pensar en el impacto que va a tener en la ciudadanía, que son quienes finalmente exigen al Estado seguridad para desarrollar normalmente sus actividades, y que lamentablemente son víctimas de hechos de violencia.
- Por lo antes indicado, hemos planteado junto a otros senadores la necesidad de reponer el proyecto de infraestructura crítica, sobre la base tanto del texto que había sido aprobado por ambas corporaciones, así como por el veto que en su momento presentó el ejecutivo.
- Han habido hechos de violencia que son inaceptables, y que evidentemente todos condenamos, sin embargo, los estados de excepción constitucional no son una solución al problema. Estos permiten prevenir algunos actos de violencia, pero hay que hacerse cargo de las causas estructurales para poder garantizar efectivamente la seguridad que merecen todos nuestros compatriotas, y lamentablemente es algo que en la actualidad no está aconteciendo.
- Voy a votar a favor de la prórroga de estado excepción constitucional, sin embargo, estamos hablando de un medicamento que permite bajarle la temperatura al paciente pero que no lo va a sanar.
- No podemos exigir al actual gobierno que presente resultados habiendo iniciado su gestión hace tan pocos meses, cuando se trata de una problemática que empezó hace mucho tiempo y que, lamentablemente, se ha ido profundizando con el paso del tiempo.

- Es evidente que cuando se decide aplicar un estado excepción constitucional que implica una limitación a derechos consagrados constitucionalmente -como la libertad de movilización y o de reunión- lo que implícitamente estamos señalando es que el Estado está fallando, que las herramientas ordinarias para velar por el orden público están fallando. Por eso es necesario aprobar el proyecto infraestructura crítica, para ver si se pueden combinar distintas herramientas de acuerdo a la realidad que se vive en las distintas regiones de Chile. Hay que ser muy responsable en el momento de determinar cuál es la herramienta que se utiliza y cuál es el grado de eficacia y eficiencia que tiene.

- Los senadores García y Aravena han presentado un proyecto de ley para poner fin al carácter monopólico de la acción para aplicar la ley de seguridad interior del Estado. La verdad es que tengo dudas a su respecto, señalándolo con toda claridad, porque me parece que esto es un instrumento político y jurídico para velar por el orden público, y quién tiene que determinar finalmente su aplicación es el gobierno.

- Si el gobierno lo hace mal, los ciudadanos entonces evaluarán mal al gobierno, y si no, lo valorarán muy bien, pero el temor que existe cuando se pueda traducir en un en una acción que puedan ejercer, eventualmente, el Ministerio Público de forma directa, podría derivar en un efecto negativo en términos de orden público. A veces por aplicar estos instrumentos se puede generar un contexto de profundización de las crisis.

- El gobierno tenía un diagnóstico al momento de iniciar su gestión, que ha cambiado sobre la base de la dura realidad. Hay grupos que no tienen voluntad de diálogo para hacerse cargo por parte del Estado de Chile de la deuda histórica que existe con los pueblos indígenas, y en particular, con el pueblo mapuche. Hay quienes ni siquiera reconocen legitimidad en el proceso constituyente que se ha desarrollado con escaños reservados y participación de los pueblos indígenas, y que por tanto no están disponibles para ningún tipo de entendimiento.

- Finalmente los ciudadanos en la zona que han tenido que padecer la violencia, que no sólo está traducida en la destrucción de la propiedad pública y privada – que ya es grave – o en personas que han perdido todas sus inversiones, su capital y patrimonio producto de estos hechos de violencia. Lo que es más grave aún, es que hay personas que han perdido la vida, que han sido asesinadas y ante ello la respuesta del Estado tiene que ser clara y categórica.

- No puede existir doble estándar, y si bien ahora estamos aprobando la renovación de este estado excepción, hay que buscar las herramientas para avanzar en la solución del problema de fondo, y así generar un mejor clima.

- Si el día de mañana se generan eventualmente abusos, excesos o violación a los derechos humanos, el Congreso tendrá algo que decir, y por tanto, hará saber al gobierno su postura, porque estamos hablando de un instrumento que limita libertades establecidas en la constitución, limita derechos fundamentales.
- Hay que tener un diálogo de buena fe, ya no bajo la lógica de quien saca dividendos políticos, sino que buscando solución a un problema de fondo que lamentablemente está teniendo un costo social y humano que es inaceptable.
- El sobreexplotar la medida excepcional que es el estado de excepción consitucional, esa una forma de reconocer que el estado está fallando. Que las fuerzas armadas que tienen como misión fundamental la defensa exterior, tengan que utilizarse para velar por el orden público en asuntos de carácter interno, es un reflejo de que estamos fallando.
- No tiene entido estar pasándonos cuentas recíprocas, porque al final ese es un resultado de suma cero. Este problema no empezó el 11 de marzo, aunque tampoco se trata de pasarle cuenta al gobierno anterior. Lo que hay que hacer ahora es determinar cómo resolvemos el problema.
- Entiendo la angustia en que viven las personas en la Araucanía, también en la provincia de Arauco. He sido testigo y también me han contado, de funcionarios públicos que no se atreven a ingresar a la zona o que han borrado los sellos a los automóviles fiscales para no ser víctimas de atentados o agresiones de todo tipo. Esa es la situación que se está produciendo y ante eso se requiere una respuesta categórica pero también inteligente del Estado.
- Hay que buscar la manera de solucionar este problema pues lamentablemente se está transformando en uno de carácter estructural, y lleva la agravante de que se traduce en vidas perdidas y, también, en la invisibilización de legítimas reivindicaciones que puedan tener determinados sectores de nuestra sociedad.
- No se construye un Chile más justo con violencia, y los que así lo creen, están profundamente equivocados, la historia nos enseña lo mal que terminan esas iniciativas. Lo que se requiere es un diálogo democrático y una voluntad categórica del Estado de perseguir a quienes cometan delitos y sancionarlos efectivamente, y por otro lado, de ir a las causas estructurales ante un malestar que existe en un sector en nuestra sociedad, por problemas que se originan en el inicio de nuestra república. Es una deuda de 2 siglos, que no empezó el 11 de marzo de este año, y que tiene que ver con legítimas reivindicaciones de los pueblos indígenas.

- Voy a votar a favor de esta prórroga, y valoró las iniciativas complementarias que han planteado algunos senadores a propósito de contar con herramientas adicionales que no impliquen conculcar o limitar derechos fundamentales.
- Valoró que en esta corporación haya habido una mayoría sustantiva y transversal para aprobar las iniciativas, e independientemente de la radicalidad con la cual se presentan ciertos discursos a veces, estos forman parte del debate democrático.

MINUTA SOBRE PROYECTOS DE LEY APROBADOS EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS, RESPECTO DE INTEGRIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; PROBIIDAD Y TRANSPARENCIA.

En el recién pasado mes de junio, el presidente de la República - Gabriel Boric - anunciaba el plan de Estrategia Nacional de Integridad Pública, enmarcado bajo los lineamientos de la Comisión Engel, la OCDE y la Contraloría General de la República. El diagnóstico, transversalmente compartido, es una profunda crisis de legitimidad de las instituciones y autoridades, lo que ha llevado a un debilitamiento del vínculo entre representantes y representados.

Dicha situación ha sido también advertida por el Congreso Nacional durante los últimos años. Así las cosas, solo desde el año 2018 a la actualidad, tanto ante la Cámara de Diputados como ante el Senado, se han presentado alrededor de 40 Proyectos de Ley relacionados con probidad y transparencia¹, y en general tendientes a la búsqueda, protección y fomento de la integridad en el ejercicio de la función pública. Sin perjuicio de ello, la gran mayoría (cerca del 75%) han sido archivados, encontrándose hoy solo unos pocos en tramitación, y siendo muchos menos los que han terminado su tramitación y sido publicado como ley.

En ese sentido, los Proyectos de Ley relacionados con probidad y transparencia, presentados desde el 2018 ante la Cámara de diputados, y que se encuentran actualmente en tramitación, son los siguientes:

1. Boletín N° 11.989-06, refundido con los proyectos N°s 11062-06 / 12947-06 / 14249-06 / 14493-06, que *“Modifica las leyes N°s 18.700 y 20.880, para exigir la realización de un examen de drogas a los candidatos a diputados y senadores, y a los parlamentarios en ejercicio”*. Fue iniciado por moción, ingresado el 7 de agosto de 2018, actualmente en primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados. No presenta urgencia.
2. Boletín N° 12.947-06, refundido con los proyectos N°s 11062-06 / 11989-06 / 14249-06 / 14493-06, que *“Establece requisitos para la inscripción de candidaturas y causal de cesación en los cargos que indica, relacionados con el consumo de drogas y vínculos con el narcotráfico”*. Fue iniciado por moción, ingresado el 12 de septiembre de 2019, se encuentra actualmente en primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados, sin urgencia alguna.

¹https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32117/1/Proyectos_en_tramite_presentados_durante_el_ultimo_periodo_legislativo_ordenados_por_comision.pdf

3. Boletín N° 13.115-06, refundido con el proyecto N° 13565-07, que “*Establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa*”. Fue iniciado por moción, ingresado con fecha 9 de diciembre de 2019, encontrándose actualmente en Comisión mixta del Senado, por rechazo de modificaciones, sin presentar actualmente urgencia pero habiéndose avisado el respaldo por el actual Presidente de la República.
4. Boletín N° 14.105-06, que “*Modifica la ley N°19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, para suprimir los aportes menores sin publicidad de la identidad del aportante*”. Fue iniciado por moción, ingresado con fecha 17 de marzo de 2021, encontrándose en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, sin presentar urgencia.

En cuanto a aquellos proyectos de ley presentados ante el Senado, que se encuentren actualmente en tramitación, desde el 2018, se encuentran:

1. Boletín N° 11.883-06, que “*Fortalece la Integridad Pública*”. Fue iniciado por mensaje, ingresado con fecha 6 de julio de 2018, encontrándose en primer trámite constitucional ante el Senado, sin presentar urgencia.
2. Boletín N° 11.900-06, Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa. Fue iniciado por moción, ingresado con fecha 10 de julio de 2018, encontrándose en primer trámite constitucional ante el Senado,
3. Boletín N° 12.870-06, Proyecto de ley que iguala plazos de inhabilidad de los fiscales del Ministerio Público para postular a cargos de elección popular. Fue iniciado por moción, ingresado con fecha 20 de agosto de 2019, encontrándose en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
4. Boletín N° 14.039-06, Incrementa transparencia y establece la obligación de informar el origen de aportes recibidos por las personas jurídicas sin fines de lucro. Fue iniciado por moción, ingresado con fecha 27 de enero de 2021, encontrándose en primer trámite constitucional ante el Senado.

Así, los proyectos relativos a probidad, transparencia e integridad pública más importantes, aprobados desde el año 2016 son los siguientes:

1. Boletín N° 7.616-06, ingresado el 03 de mayo de 2011, iniciado por Mensaje, sobre “*Probidad en la Función pública*”, Ley N° 20.880, publicada el 05 de enero de 2016.
2. Boletín N° 10.694, ingresado el 17 de mayo de 2016, iniciado por Moción, que Modifica la ley N°19.884, sobre “*Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en materia de límite a los montos de los aportes que efectúan los candidatos a concejal en sus campañas*”, Ley N° 20.937, aprobada el 27 de julio de 2016.
3. Boletín N° 13.305, ingresado el 17 de marzo de 2020, iniciado por Mensaje, que “*Modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia*”, Ley N° 21.311, publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2021.
4. Boletín N° 14.032-06, iniciada por mensaje, ingresado el 21 de enero de 2021, que “*Modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios*”, Ley N° 21.445, publicada en el Diario Oficial el 28 de abril de 2022.
5. Boletín N° 13.301, iniciada por mensaje, ingresada el 17 de marzo del 2020, que “*Modifica la ley N°19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos contemplados en dicha ley*”, Ley N° 21.333, publicada el 12 de mayo de 2021